



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: 0431/2020

ACTORA: ***** “**
*****”

AUTORIDAD DEMANDADA: “VEOLIA AGUA
AGUASCALIENTES MÉXICO”, S.A. DE C.V.

TERCERA INTERESADA: COMISIÓN
CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Aguascalientes, treinta de octubre de
dos mil veinte.

V I S T O S para resolver en definitiva los autos del
juicio de nulidad número 0431/2020,

RESULTANDO

I. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes
del Poder Judicial del Estado el *diecinueve de febrero de dos mil veinte*,
remitido a esta Sala al día hábil siguiente, *****
***** y/o ***** *****
***** , en su
carácter de presidente y representante legal del *****

***** , demandó de la concesionaria “Veolia
Agua Aguascalientes México”, S.A. de C.V., la nulidad del acto
administrativo que precisó en los siguientes términos:

2.- LA RESOLUCIÓN O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE SE IMPUGNA.

Demando la nulidad lisa y llana de las determinaciones de pago
que detallo a continuación, las que aritméticamente suman la cantidad de
\$11,072.00 (ONCE MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) siendo las siguientes:

2.1.- De la determinación de pago que se contiene en el recibo
número ***** , derivado de la cuenta, ***** expedido por
VEOLIA AGUA AGUASCALIENTES MÉXICO, S.A. DE C.V.,
en esta Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a cargo de
***** “**
*****”, con fecha de
emisión 29 de diciembre del 2019 QUE REFIERE COMO
CANTIDAD TOTAL A PAGAR 5.760.00 (cinco mil
setecientos sesenta) PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL,

por concepto de: "Adeudo Anterior" por la cantidad de \$2,525.69, "Cargos del Mes" "Consumo" por la cantidad de \$2,782.65, "Recargo por Pago Extem." \$5.74, "IVA TASA 16%" \$445.22, "Adeudo del Mes" \$3,233.61, "Adeudo Total" \$5,759.30, "Redondeo de Caja" \$0.70 y "Total a Pagar" por \$5,760.00; precisándose en dicho documento como *PERIODO DE CONSUMO "05/Nov/2019 AL 04//Dic/2019*, respecto del servicio de agua potable correspondiente a la ***** ** ** *******, tipo de facturación "servicio medido", nivel tarifario "comercial", meses de adeudo "01".

Documento que acompaño al presente, identificándolo como *Anexo #3*.

2.2.- De la determinación de pago que se contiene en el recibo número ***** **, derivado de la cuenta, ***** expedido por *VEOLIA AGUA AGUASCALIENTES MÉXICO, S.A. DE C.V.*, en esta Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a cargo de ***** ***** "*****", con fecha de emisión *29 de diciembre del 2019 QUE REFIERE COMO CANTIDAD TOTAL A PAGAR \$5,312.00 (cinco mil trescientos doce) PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL*, por concepto de: "Adeudo Anterior" por la cantidad de \$2,475.00, "Cargos del Mes" "Consumo" por la cantidad de \$2,440.17, "Recargo por Pago Extem." \$5.63, "IVA TASA 16%" \$390.43, "Adeudo del Mes" \$2,863.23, "Adeudo Total" \$5,311.93, "Redondeo de Caja" \$0.07 y "Total a Pagar" por \$5,312.00; precisándose en dicho documento como *PERIODO DE CONSUMO "05/Nov/2019 AL 04//Dic/2019*, respecto del servicio de agua potable correspondiente a la ***** ** *(sic) #5* *******, tipo de facturación "servicio medido", nivel tarifario "comercial", meses de adeudo "01".

Documento que acompaño al presente, identificándolo como *Anexo #4*."

II. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se recibieron las pruebas ofrecidas y se ordenó emplazar a la concesionaria demandada y a la tercera interesada Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes [CCAPAMA];

III. Mediante proveído del diecisiete de junio de dos mil veinte se admitió la contestación de demanda por parte de la concesionaria demandada, pronunciándose esta Sala respecto de las pruebas ofrecidas en términos del propio acuerdo y se ordenó correr traslado a la parte actora para que formulara ampliación a la demanda, si a su interés así conviniera;

IV. Por auto de veintidós de julio de dos mil veinte, se tuvo a



la parte actora formulando ampliación de demanda.

V. Mediante proveído del *veintiocho de agosto de dos mil veinte*, se admitió la contestación a la ampliación de demanda que formuló la demandada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de juicio.

VI. En audiencia de juicio celebrada el *veintiuno de octubre de dos mil veinte*, se declaró perdido el derecho que tuvo la Tercero Interesada, para formular contestación de demanda, se desahogaron las pruebas admitidas a juicio, se agotó el periodo de alegatos, y se citó el asunto para dictar sentencia definitiva, lo que se hace conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver del presente juicio, conforme a los artículos 51, segundo párrafo, y 52, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 33-A, y 33-F, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1, primer párrafo, y 2, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, toda vez que se impugna una resolución administrativa emitida por la concesionaria de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado o saneamiento y su reuso en el Municipio de Aguascalientes, actuando como autoridad.

SEGUNDO.- La existencia de los actos administrativos impugnados, se acredita con el recibo número ***** de fecha *veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve*, que obra a foja *doce* de los autos; resolución en la que se determina y exige a la parte actora el pago de \$5,760.00 (CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) por *un meses* de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en ***** ** ** ***** , Avenida ** ***** número ***** ** , ***** ***** ***** ***** de esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, cuenta

*****, cuyo último periodo de facturación comprende desde el *cinco de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil diecinueve* —05/Nov/2019 AL 04/Dic/2019—.

De igual manera, con el recibo número ***** ** de fecha *veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve*, que obra a foja *trece* de los autos; resolución en la que se determina y exige a la parte actora el pago de \$5,312.00 (*CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.*) por *un mes* de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en ***** ** ** ***** **, Avenida ** ***** ** número 302 c-597-7998, ***** ***** ** ***** ** de esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, cuenta ***** **, cuyo último periodo de facturación comprende desde el *cinco de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil diecinueve* —05/Nov/2019 AL 04/Dic/2019—.

Probanzas que al provenir de las partes y sin que exista objeción alguna, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 335, 341 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, según su numeral 47.

TERCERO.- Causales de improcedencia.

La concesionaria demandada afirma que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 26, fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.

Manifiesta que esta Sala Administrativa es **incompetente** para conocer del presente asunto, esto dice: a) porque el recibo de pago impugnado no lo realiza en funciones de autoridad, y b) porque la naturaleza de la controversia no es administrativa ni fiscal, sino mercantil.

Refiere que el recibo de pago no lo emite en funciones de autoridad, porque si bien es prestador del servicio público de agua potable en virtud de la concesión que le fue otorgada por el Municipio de Aguascalientes, lo cierto es que la relación jurídica que tiene con el usuario deriva de una relación contractual —contrato de suministro—



, por lo que su relación es de coordinación y no de supra a subordinación, razón por la que no se encuentra actuando en funciones de autoridad.

Bajo esa premisa, refiere que el requerimiento de pago no es un acto de autoridad, dado que no proviene de una relación de supra a subordinación, ni se emite de manera unilateral por parte de la concesionara, sino que tiene como base el incumplimiento a la obligación de pago derivada del contrato de suministro que celebró con el usuario, en una relación de coordinación.

Como sustento de su afirmación, invoca la tesis de jurisprudencia número P./J. 92/2001, de la novena época, con número de registro: 189353, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: “AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.”

Agrega que conforme a lo previsto en los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, la naturaleza de la controversia derivada del suministro de agua potable no es administrativa ni fiscal, sino mercantil, por lo que cualquier controversia suscitada entre las partes derivadas de ese tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de conformidad con el numeral 104, fracción II, constitucional.

Como sustento de su afirmación, invoca las siguientes tesis aisladas 2a. XLII/2015 (10a.) —con número de registro: 2009790— y 2a. CIX/2013 (10a.) —con número de registro: 2005149—, ambas de la décima época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro indican, respectivamente:

“COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA

VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a) (*)].”

“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ÉSTE SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.”

Esta Sala Administrativa resolvió en pleno mediante interlocutoria de *trece de marzo de dos mil veinte*, que no se actualiza la citada causal de improcedencia, por lo que ya fueron motivo de decisión de este órgano jurisdiccional y por tanto existe cosa juzgada entorno a ello.

En efecto, por virtud de la institución de la cosa juzgada, los temas definidos por un órgano jurisdiccional en una resolución contra la que no procede medio de defensa ordinario alguno no son susceptibles de modificarse, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica.

En la especie, el recurso de reclamación fue interpuesto contra el auto de admisión de demanda, en tal medio de defensa esta Sala definió en Pleno, que no se configuraban los motivos de improcedencia expuestos por la concesionaria demandada, de lo que se sigue, que tal determinación constituye cosa juzgada y, por ende, las invocadas causales ya fueron examinadas.

En la inteligencia de que no impide llegar a esta conclusión la circunstancia de que los argumentos por los que la demandada concluya se actualizan las causales de improcedencia no sean exactamente iguales, pues mientras exista identidad temática prevalece el principio de cosa juzgada.

Posteriormente al contestar la ampliación de demanda, la demandada expresa como causal de improcedencia el consentimiento tácito, afirmando que no se configuran los supuestos establecidos en el artículo 31 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para que se lleve a cabo una ampliación de demanda y por tanto, los conceptos de nulidad expresados en ésta, no pueden tomarse en consideración, por lo que debe tenerse por consentido el acto impugnado.



Resulta inexacto que deba decretarse el sobreseimiento porque existe **consentimiento tácito** del ahora actor, ya que si ésta manifestó en su demanda el desconocimiento de los antecedentes que sirvieron de base para la determinación del acto impugnado, la parte actora puede ampliar la demanda en relación a los documentos y pruebas aportados por la demandada en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 31¹ y el tercer párrafo del artículo 37² de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, como en la especie sucedió, toda vez que la demandada en su contestación, introduce cuestiones que no eran conocidas por el actor al presentar la demanda; en el caso específico, las pretendidas publicaciones de las tarifas de agua potable.

De ahí que no se decrete el sobreseimiento del presente juicio como lo solicita la concesionaria demandada.

CUARTO.- En virtud de que no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la demandada, ni esta Sala advierte que se actualice alguna de oficio, lo que procede es estudiar los conceptos de nulidad que hace valer la accionante, los que por economía procesal no se transcriben, aunado a que no es un requisito formal de las sentencias.³

¹ “ARTICULO 31.- Cuando se impugne una negativa ficta, el actor tendrá derecho de ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la misma.

También podrá ampliar la demanda, cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente, por consentimiento tácito, si el actor considera que la notificación del acto impugnado se practicó de manera ilegal y **cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del Artículo 37, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.**

...
...”

² “ARTICULO 37.- En la contestación de la demanda, no podrá cambiarse ni la motivación ni los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

En la contestación de la demanda o hasta antes de los alegatos la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada.

En el caso de resolución negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que se apoye la misma.”

³ Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la novena época, localizable con número de registro: 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro señala: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”**

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la demandada, sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.

QUINTO.- ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.

De los argumentos expuestos por la demandante, se estudian los contenidos en la parte final del SEGUNDO de los conceptos de nulidad del escrito inicial de demanda, ya que de resultar fundados, son los que más protección le brindarían.⁴

Así en dichos argumentos afirma que los recibos impugnados carecen de fundamentación y motivación, porque en los mismos se desprende que la demandada hace constar que el periodo de lectura del servicio lo fue el correspondiente al periodo que ocupa del **05 de noviembre al 04 de diciembre de 2019**, sin embargo, en ningún momento señala cuál o cuáles tarifas fueron las que se aplicaron a cada uno de los periodos mensuales que se contienen en dicho periodo ni a los correspondientes a los meses que se importan la cantidad que se determina como adeudo anterior, por lo que no se tiene certeza de cuál o cuáles tarifas fueron las aplicadas por la demandada a cada uno de los periodos facturados, ni los consumos generados en cada uno de ellos, ni mucho menos se puede saber si a cada periodo le fue aplicada la cuota o tarifa que le correspondía y si se trata de la autorizada, ello dejándole en un evidente estado de indefensión e incertidumbre jurídica.

Dichos argumentos, son **fundados y suficientes** para declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, pues como lo

⁴ Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/9, de la novena época, localizable con número de registro electrónico: 166717, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, cuyo rubro señala: **“CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).”**



afirma la actora en su escrito inicial de la demanda, las resoluciones impugnadas carecen de debida motivación, al ser la misma insuficiente.

Lo anterior atendiendo a la causa de pedir y conforme con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; Tomo XII, Agosto de 2000, Materia: Común, Tesis: P./J. 68/2000, Página: 38, de contenido siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquellas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.

Es así, porque de los recibos impugnados (fojas 12 y 13 de los autos), se obtiene que el último periodo de consumo facturado en los recibos comprende del cinco de noviembre al cuatro de diciembre del dos mil diecinueve —05/Nov/2019 AL 04/Dic/2019—.

Luego, los recibos impugnados contemplan días del mes de noviembre así como días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

Ahora bien, la ccesionaria con el propósito de justificar el cobro que exige a la usuaria, estableció en los recibos impugnados la INFORMACIÓN DE SUS CONSUMO así como los

ELEMENTOS PARA CÁLCULO DEL CONSUMO, no obstante ello omitió precisar de manera clara y detallada que tarifa aplicó para cada uno de los meses facturados (noviembre y diciembre del dos mil diecinueve), es decir, al establecerse períodos de facturación mayores a un mes, no queda claro si la demandada aplicó la tarifa correspondiente a un mes, a ambos en forma proporcional en base a los días transcurridos de cada mes, lo que se traduce en una **insuficiente y por tanto indebida fundamentación y motivación** de las resoluciones impugnadas, contraviniéndose lo dispuesto en el artículo 4, fracción V⁵ de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, así como el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, el cual tiene como propósito primordial que el usuario conozca con detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

No basta pues, que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera insuficiente, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente.

En ese contexto, y toda vez que la concesionaria para sostener el sentido de su resolución, únicamente se limita a exponer de manera dogmática ciertos datos y cantidades, sin que precise de manera concreta de dónde o cómo es que las obtuvo o que tarifas aplicó, lo que procede es declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, al carecer de sustento.

Al resultar fundado el concepto de nulidad en análisis, se hace innecesario entrar al estudio de los restantes argumentos, ya que cualquiera que fuera el pronunciamiento que al efecto se emitiera, el actor no obtendría un mayor beneficio.

SEXTO.- Según las consideraciones apuntadas en el

⁵ "ARTICULO 4º.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:

...
V.- Estar fundado y motivado debidamente;"



considerando que antecede, es de actualizarse la causal de anulación prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, por lo que con fundamento en el diverso numeral 62, fracción II, de ese mismo cuerpo de leyes, se **DECLARA** la **NULIDAD LISA Y LLANA** de las determinaciones contenidas tanto en el recibo número ***** de fecha *veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve*, que obra a foja *doce* de los autos; resolución en la que se determina y exige a la parte actora el pago de \$5,760.00 (*CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.*) por *un meses* de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en ***** ** ** ***** , Avenida ** ***** número ***** ** , ***** ***** ***** ***** de esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, cuenta ***** , cuyo último periodo de facturación comprende desde el *cinco de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil diecinueve* —05/Nov/2019 AL 04/Dic/2019—.

Como en el recibo número ***** ** de fecha *veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve*, que obra a foja *trece* de los autos; resolución en la que se determina y exige a la parte actora el pago de \$5,312.00 (*CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.*) por *un meses* de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en ***** ** ** ***** , Avenida ** ***** número 302 c-597-7998, ***** ***** ***** ***** de esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, cuenta ***** , cuyo último periodo de facturación comprende desde el *cinco de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil diecinueve* —05/Nov/2019 AL 04/Dic/2019—.

Como consecuencia de lo anterior, y con fundamento en el artículo 63, primer párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, deberá restituirse a la actora en los derechos que le hubieren sido afectados con motivo de las resoluciones impugnadas, cuya nulidad ha sido declarada, por lo que se ordena a la concesionaria demandada

VEOLIA AGUA AGUASCALIENTES MÉXICO, S.A. DE C.V. devuelva a la parte actora ***** *****, por conducto de su presidente y representante legal el C. ***** y/o ***** *****, las cantidades de \$5,760.00 (CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) y de \$5,312.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.); que erogara por concepto de pago por el recibo de consumo de agua combatido, como lo acreditó con los *ticket de pago* expedidos por la misma concesionaria, *por concepto de cobro de agua y drenaje*, el *veintiocho de enero de dos mil veinte*, que obran a fojas *11 Bis y 12 Bis* de los autos.

Dejándose los mencionados documentos a disposición de la demandada para el efecto de que, conforme al trámite legal que corresponda, gire sus instrucciones y/o realice las gestiones necesarias, a fin de que se verifique la devolución de su importe a la parte actora a la brevedad posible.

Por las razones que se informan en este fallo, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, fracción II, y 62, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, se resuelve:

PRIMERO.- Es procedente la acción ejercida por la parte actora.

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de las determinaciones contenidas en los recibos números ***** y ***** ** emitido por la concesionaria “Veolia Agua Aguascalientes México”, S.A. de C.V., el *veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve*, visibles a fojas *doce y trece* de los autos.

TERCERO.- Se ordena hacer **devolución** a la parte actora de las cantidades referidas en el Considerando Sexto del presente fallo, debiendo seguir los lineamientos que fueron ordenados en éste.

CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Poder



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 0431/2020

Judicial del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los Magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos el tres de noviembre de dos mil veinte. Conste.-

La Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia o resolución 0431/2020 dictada en treinta de octubre de dos mil veinte por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, constante de siete fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3o fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como del trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se suprimieron: el nombre de las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios, y demás datos generales, información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita, además de lo dispuesto por los artículos 1°, 2° fracción II, 3°, 11, 12 y 99 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Conste.